



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL – PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	MARTHA OLICIA ZULUAGA
DEMANDADOS:	COLPENSIONES
RADICADO:	0050013105-002-2016 – 00011
ACTA N°:	44

En la fecha indicada, siendo las **dos de la tarde** del día previamente señalado, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por MARTHA OLIVIA ZULUAGA en contra de COLPENSIONES, para pronunciarse en virtud del **RECURDO DE APELACION** instaurado por la DEMANDANTE frente a la sentencia con la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 44** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

La demandante pretende con este proceso lo siguiente: **i)** Se CONDENE al reajuste de la pensión con una tasa del 90%; **ii)** Un retroactivo pensional desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2013; **iii)** Declarar que la actora no se encuentra en la obligación de hacer la devolución de las mesadas correspondientes al período diciembre 2013 – enero 2014.

¹ Folio 1-10

Para sustentar sus pretensiones afirmó en síntesis: **i)** La demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo **36 de la ley 100** y lo conservó según el párrafo transitorio 4 del artículo 1 del acto legislativo. Mediante Resolución GNR 342255 del 05 de diciembre de 2013, le fue reconocida la pensión vitalicia de vejez en cuantía mensual de **\$2.569.201**, efectiva a partir del primero de diciembre de 2013. COLPENSIONES tomo un IBL de **\$4.145.210** y una tasa de **61.98 %**., pero debió aplicarse el **90%**. La respectiva pensión de vejez debió ser reconocida con una tasa de remplazo del valor de 90% del IBL. Interpuso recurso de apelación y la entidad mediante resolución VPB 47334 confirmo la resolución objeto del medio impugnativo.; **ii)** En relación con la pretensión de retroactivo pensional señala que las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, procedieron a reportar ante COLPENSIONES la novedad de **retiro** a partir del **1 de julio de 2013**. Mediante resolución GNR 342255 del 05 de diciembre de 2013, le fue reconocida la pensión vitalicia de vejez a partir del **1 de diciembre de 2013**. La pensión de vejez debió haber sido reconocida desde el **1 de julio de 2013**. **iii)** Finalmente agrega que Colpensiones dispuso de forma unilateral que la demandante reintegrara **\$4.565.644** correspondiente a las mesadas pensionales que le fueron pagadas por los periodos de **diciembre de 2013 y enero de 2014**.

1.2. COLPENSIONES contestó oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCION y COMPENSACION

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **20 de septiembre de 2017** la Juez ABSOLVIÓ de todas las pretensiones de la demanda y CONDENÓ en COSTAS a la parte actora. Para ello razonó de este modo: **i) En relación con la pretensión de reajuste pensional**, luego de invocar los artículos 36 y 151 de la Ley 100 en concordancia con el inciso 2º del decreto 691 de 1994 y analizar la prueba documental del plenario con la que se acredita que la demandante prestó servicios a entidades públicas del orden territorial SIN COTIZACIONES AL I.S.S. antes del 30 de junio de 1995, concluyó :La demandante es beneficiaria del régimen de transición, pero su régimen anterior en materia de edad, tiempo y monto de la pensión de vejez, es el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que dispone una tasa de remplazo del 75%. Como la demandante no acreditó que su régimen anterior fuese el Decreto 758 de 1990, no puede accederse al reajuste de la pensión con una tasa del 90%. **ii)** Respecto a la pretensión de **retroactivo pensional desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2013**, invocó los artículos 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990 y el 19 de la ley 344 de 1996, para argumentar que en el caso de los servidores públicos, para poder acceder al disfrute de la prestación es absolutamente necesario

el retiro del servicio público ; **iii)** Y frente a la petición de **declarar que la actora no se encuentra en la obligación de hacer la devolución de las mesadas correspondientes al período diciembre 2013 – enero 2014**, ABSOLVIÓ luego de explicar que por medio de la Resolución GNR 342 255 del 5 de diciembre de 2013 la demandante fue incluida en nómina a partir del 1° de diciembre de 2013 encontrándose activa en la nómina de pensionados, pero además se encontraba vinculada activamente al servicio oficial de la entidad EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, retirándose del servicio público el 31 de enero de 2014.

3. EL RECURSO DE APELACION DE LA PARTE DEMANDANTE

Oportunamente en la audiencia pública, la parte demandante recurrió la sentencia insistiendo en que se revoque la decisión absolutoria en relación con las pretensiones, así:

i) Sobre la reliquidación, señala que a la actora sí le asiste derecho al reajuste de pensión con una tasa del **90%**, por lo que se debe condenar al reajuste desde la fecha de causación. **ii)** Respecto al RETROACTIVO E INTERESES MORATORIOS, insiste en que la demandante tiene derecho a que se le otorgue el retroactivo desde el **1 de julio** hasta el **30 de noviembre de 2013**. **iii)** Finalmente sobre la pretensión de no efectuar la devolución de mesadas ya pagadas, plantea que no puede argumentarse que debe devolver suma alguna porque ésta pertenezca al ERARIO PÚBLICO. Los aportes que se hacen por concepto de pensión se hacen por el Empleador y el trabajador.

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia², las partes se abstuvieron de intervenir

Pues bien, se ha proferido una **DECISION ABSOLUTORIA** en contra de la DEMANDANTE. y en tanto son varias las PRETENSIONES del proceso, el ANÁLISIS se efectuará en el siguiente orden lógico:

La parte demandante insiste en que en este proceso se debe acceder al REAJUSTE de la PENSION DE VEJEZ que le fue reconocida, respetando el régimen de transición que le permite acceder a la tasa del régimen anterior vigente, afirmando que debe ser del 90%: **i)** Debemos analizar el acervo probatorio para identificar si el traslado de la demandante al RAIS afectó el derecho a pensionarse con los beneficios del régimen de transición, a pesar de que se hubiese radicado inicialmente en cabeza suya por tener más de 35 años al 1 de abril de 1994, sin que tuviese 15 años de servicio a dicha fecha.

² Artículo 15 Decreto 806 de 2020

ii) Y a partir de ahí, verificar si en su caso, cual es el régimen anterior aplicable, para efectos de definir si le asiste el derecho a un REAJUSTE de la mesada pensional

De otro lado, se verificará si resulta acertada la DECISION adoptada en primera instancia, de no CONDENAR a COLPENSIONES al RETROACTIVO DE LA PENSION DE VEJEZ solicitada en la demanda por ostentar la calidad de servidora público al momento de percibir la pensión. Este análisis genera implícitamente, la resolución del tercer problema jurídico que propone la apelante, referido a si resulta procedente en su caso o no, **DECLARAR** que no se encuentra en la obligación de hacer la devolución de las mesadas de diciembre de 2013 y enero de 2014

5. SOBRE EL DERECHO AL REAJUSTE DE LA PENSION DE VEJEZ - EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN CASOS COMO EL PRESENTE

En la sentencia de instancia, la Juez afirmó que de la Resolución **GNR 342 255 del 5 de diciembre 2013** que obra a **folios 14 a 18** se infiere que la actora es beneficiaria del régimen de transición. Pero debe destacarse que en el mismo acto administrativo se afirma que la señora ZULUAGA ARISTIZABAL se trasladó al RAIS, y con la prueba decretada en esta instancia, efectivamente se comprueba que estando afiliada a **CAJANAL** y vinculada laboralmente a **CORNARE**, el **2 de febrero de 1995** se trasladó a **COLFONDOS**³ y luego el **1 de marzo de 1999**, a **PROTECCION**⁴.

Este aspecto resulta absolutamente relevante, porque conforme el **artículo 36 inciso 4 de la Ley 100**, **el régimen de transición no se aplica para las personas que voluntariamente se hubieren acogido al RAIS, salvo para aquellos que hubiesen cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, en los términos de la sentencia C-789-02.**

Pues bien, en este caso concreto, se advierte que la demandante nació el **12 de marzo de 1957 (Folio 12)**, por lo que resulta claro que tenía más de 35 años de edad al **30 de junio de 1995**, fecha en que entró en vigencia del sistema general de pensiones en su caso, por estar vinculada a una entidad pública del orden territorial (**CORNARE**)⁵. Pero a dicha fecha NO tenía más de 15 años de servicios, porque su vinculación laboral inició con el MUNICIPIO DE MEDELLÍN el **8 de julio de 1987 (Folio 125)**, lo que en principio llevaría

³ Folio 142

⁴ Folio 137

⁵ Folio 118

a concluir, que no resulta procedente analizar la pretensión de reajuste pensional, en razón de la pérdida del beneficio de la transición por el traslado de régimen.

Pero la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado un precedente, en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala en los que la demandada es la administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y se discute el derecho pensional como **beneficiaria del régimen de transición**, a pesar de que se acredite en el proceso un **traslado de régimen al RAIS sin acreditar 15 años de servicios** a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones⁶. En el precedente se explica que en materia de seguridad social, el juez no puede ignorar que por la trascendencia de los derechos pensionales, la información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, y por ello, no pueden pasar inadvertidas falencias informativas y mucho menos considerar que ello no es de su resorte, porque es claro que cuando quien acude a la jurisdicción reclama que se le respete el régimen de transición, indiscutiblemente surge la perentoriedad de estudiar los elementos estructurales para que el mismo opere, y por ello, se debe constatar que el traslado se produjo en términos de eficacia, para luego, determinar las consecuencias propias.

Por esta razón, cuando lo que se discute es el traslado de regímenes que conlleve a la pérdida de la transición, al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, sino que se debe determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si ese traslado estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, lo que está sujeto a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales.

Pues bien, acogiénose el precedente jurisprudencial referido, la Sala decretó las pruebas de oficio dirigidas a indagar si la demandante efectivamente suscribió un formulario de traslado al RAIS y si recibió la asesoría necesaria para poder afirmar que éste fue eficaz, por tratarse de una decisión libre, voluntaria e informada.

Fue así como se aportó copia del formulario de VINCULACIÓN a COLFONDOS⁷, y ante el requerimiento efectuado por la Sala sobre si se efectuó asesoría antes de que la

⁶SL 12136 - RADICADO 42.292 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN - SL 9519 del 22 de julio de 2015 Radicación 55.050 RIGOBERTO ECEHEVERRY BUENO

⁷ Folio 142

demandante suscribiera el formulario , la AFP contestó que la asesoría se hacía de manera verbal, directamente en la interacción que se realiza entre cliente y asesor , por lo que no cuentan con soporte físico de la misma, siendo el único soporte el formulario de afiliación⁸.

Pues bien, en criterio de esta Sala de Decisión, para poder concluir que la señora María Aura Cecilia Gómez Vélez estuvo válidamente afiliada en el RAIS y que por esa razón perdió los beneficios del régimen de transición a pesar de regresar a COLPENSIONES, debe existir prueba en el proceso de que le fue brindada una **asesoría personalizada** analizando las circunstancias **particulares** de su caso para poder predicarse que fue un acto jurídico celebrado de manera libre. Debe insistirse en que la labor del funcionario de COLFONDOS en esa ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA a la formalización del traslado, no sólo debía ser completa y comprensible para MARTHA OLIVIA ZULUAGA, sino que debía trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, mostrándole con detalle las diferentes alternativas, los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, para evitar que ella tomara una opción que claramente lo perjudicaba, advirtiéndole de los efectos relacionados con la pérdida del régimen de transición.

Siendo, así las cosas, es claro que en este proceso no se ha acreditado que a la demandante se le hubiese brindado la información necesaria para poder predicar que la decisión de traslado proviene de una manifestación libre y voluntaria, y por ello, a la luz de lo previsto en los artículos **13 literal b y 272 de la Ley 100**, en concordancia con los **artículos 53 y 48 de la Constitución Política**, debe concluirse que carece de eficacia el traslado de régimen. Por esta razón, en este caso no resulta procedente aplicar lo previsto en el artículo 36 inciso 4 de la Ley 100, que consagra la pérdida del régimen de transición sólo para las personas que de manera libre y voluntaria se acogieran al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Habiéndose dilucidado lo anterior, debemos ahora verificar cual es el régimen pensional anterior de la demandante, debiéndose destacar que no la afectó el A.L. 1 de 2005, porque aunque su derecho se causó después del **31 de julio de 2010**, tenía más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del acto legislativo: i) La señora ZULUAGA ARISTIZABAL trabajó con el MUNICIPIO DE MEDELLIN entre el **8 de julio de 1987 y el 9 de agosto de 1988**, tiempo durante el cual no se efectuaron cotizaciones a ninguna caja de previsión⁹. ii) Luego se vinculó laboralmente con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RIONEGRO – CORNARE - entidad pública del orden territorial, desde el **6**

⁸ Folio 141

⁹ Folio 125 - 127

de febrero de 1989 hasta el 7 de enero de 1997. De este período, cotizó en CAJANAL del 6 de febrero de 1989 al 28 de febrero de 1995¹⁰. Y a partir del 15 de septiembre de 1997 se vincula con EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN¹¹, efectuando cotizaciones al sistema general de pensiones¹².

La demandante pretende que se ordene el reajuste de la pensión que hoy reconoce **COLPENSIONES** aplicando una tasa del **90% con el Decreto 758 de 1990**, pero se advierte con claridad que antes de que entrara en vigencia el sistema general de pensiones en momento alguno efectuó cotizaciones al I.S.S., de manera que si bien existen eventos en los que las personas tienen varios regímenes anteriores pudiendo optar por el más favorable¹³; no es éste el caso, porque el que resultaba procedente aplicar es el consagrado en la **Ley 71 de 1988**, y a éste será al que se accederá con el **75%** sobre el **IBL** con el que se reconoció la pensión. Lo anterior, porque las pruebas del proceso nos muestran que a lo largo de toda su vida ha estado vinculada en el sector público, un tiempo con el MUNICIPIO DE MEDELLIN sin cotizaciones a caja de previsión alguna, luego con CORNARE cotizando a CAJANAL y finalmente con EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, sumando un total de **1274 semanas**, de acuerdo a lo definido por la entidad al momento del reconocimiento pensional¹⁴, **acto administrativo** en el que se suman las semanas COTIZADAS y el tiempo laborado para la entidad territorial.

Ahora bien, habiéndose señalado que en éste caso el régimen anterior aplicable es el consagrado en el **artículo 8 de la Ley 71 de 1988**, en el que se exige como requisito 20 años de servicios COTIZADOS, debe destacarse que, para cumplirlo, resulta procedente sumar las semanas cotizadas con el TIEMPO PUBLICO NO COTIZADO. Este criterio ha sido planteado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia con **Radicado 43.904 del 26 de marzo del 2014**, reiterada con las sentencias identificadas con **Radicado 45.446 del 7 de mayo del 2014**, **Radicado 58.720 del 25 de junio de 2014**, **SL 18427 de 2017** y **SL 1093 de 2018**.

Siendo así las cosas, se REVOCARÁ la decisión de primera instancia, para en su lugar CONDENAR al reajuste de la pensión de vejez, con una tasa del **75%** sobre el **IBL** con el que se reconoció la pensión: **\$4.145.210**, para un valor inicial de **\$3.108.907**, superior al reconocido por **COLPENSIONES** de **\$2.569.201**, porque reconoció la pensión mediante

¹⁰ Folio 118

¹¹ Folio 34

¹² Folio 27 a 33

¹³ Con sentencias **SL 1947 y 1981 de 2020** la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró pertinente modificar el precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990 pueden consolidarse con semanas cotizadas al I.S.S. y con tiempos laborados a entidades públicas

¹⁴ Folio 14- 18

Resolución del **5 de diciembre de 2013** con una tasa del **61.98%** al aplicar como régimen pensional el de la Ley 100 de 1993¹⁵; reliquidándola posteriormente con **Resolución del 22 de diciembre de 2014** con una tasa del **63.56%** con cuantía inicial de **\$2.695.502**¹⁶.

COLPENSIONES propuso la excepción de **PRESCRIPCION**, pero de acuerdo a lo previstos en los artículos 6 y 151 del Código Procesal del Trabajo es claro que en este caso no ha prescrito reajuste alguno: **i)** La pensión fue reconocida con Resolución del **5 de diciembre de 2013**¹⁷ a partir del **1 de diciembre de 2013**, pero se solicitó reliquidación pensional que fue definida con **Resolución del 4 de junio de 2015**, con la que se resolvió el recurso de APELACION contra la GNR 436122 del 22 de diciembre de 2014¹⁸; **ii)** Instauró la demanda el **16 de diciembre de 2015**¹⁹.

Así, el **RETROACTIVO** del reajuste va desde el **1 de FEBRERO de 2014**, porque la demandante trabajó como servidora pública al servicio de EPM hasta el 31 de enero de 2012, tal como se analizará en el siguiente acápite de esta sentencia. Y se calcula hasta agosto de 2020, con **13 mesadas al año**, porque, aunque el derecho se causó antes del **31 de julio de 2011**, la mesada es superior a 3 salarios mínimos

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2013	1,94%	\$ 2.695.502	\$ 3.108.907	\$ 413.405		\$ 0
2014	3,66%	\$ 2.747.795	\$ 3.169.220	\$ 421.425	12	\$ 5.057.101
2015	6,77%	\$ 2.848.364	\$ 3.285.213	\$ 436.849	13	\$ 5.679.040
2016	5,75%	\$ 3.041.198	\$ 3.507.622	\$ 466.424	13	\$ 6.063.511
2017	4,09%	\$ 3.216.067	\$ 3.709.310	\$ 493.243	13	\$ 6.412.163
2018	3,18%	\$ 3.347.604	\$ 3.861.021	\$ 513.417	13	\$ 6.674.420
2019	3,80%	\$ 3.454.058	\$ 3.983.802	\$ 529.744	13	\$ 6.886.667
2020		\$ 3.585.312	\$ 4.135.186	\$ 549.874	8	\$ 4.398.992
					TOTAL	\$ 41.171.894

COLPENSIONES seguirá pagando a la demandante **a partir del mes de septiembre de 2020** una mesada pensional de **\$ 4.135.186**, que se incrementará anualmente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 100, y la mesada adicional de noviembre. La entidad descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, los que, de acuerdo con reciente sentencia

¹⁵ Folio 14- 18

¹⁶ Folio 20

¹⁷ Folio 14- 18

¹⁸ Folio 20 -26

¹⁹ Folio 10

de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, operan por mandato legal, sin necesidad de declaración judicial: **(SL 1169 de 2019)**

Se CONDENARÁ a la INDEXACION de este retroactivo, porque el valor de los reajustes debieron ingresar al patrimonio de la demandante años atrás, de manera que, cuando la entidad realice el pago, se verá afectado por la devaluación de la moneda. Por eso deberá indexarse con siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada reajuste**

VALOR A INDEXAR que se refiere al **monto de cada reajuste**

6. SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO: LA INCOMPATIBILIDAD DE PENSION DE VEJEZ Y SALARIO EN EL CASO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La demandante en sus pretensiones busca que se CONDENE a un retroactivo pensional entre el **1 de julio y el 30 de noviembre de 2013**. Mediante resolución GNR 342255 del 5 de diciembre de 2013, se le reconoce el pago de la pensión **desde el 1 de diciembre de 2013, anunciándose** que sería ingresada en la nómina de febrero pagadera en marzo de 2014²⁰. Pero se acredita en el proceso, que la demandante laboró para EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN hasta el 31 de enero de 2014²¹

En efecto, mediante **Resolución VPB del 4 de junio de 2015**, se declaró un doble pago, y se ordenó a la demandante el reintegro de \$4.565.644 por la mesada de diciembre de 2013 (\$2.260.901) y de enero de 2014 (\$2.304.743) ²².

Siendo así las cosas, si bien se acredita en el proceso que la demandante efectuó cotizaciones solo hasta el mes de junio de 2013²³, acreditándose incluso la novedad de Retiro, la SALA **CONFIRMARÁ** la sentencia de instancia en este aspecto, debido a que también se demostró que para el periodo comprendido entre el **1 de julio y el 30 de noviembre de 2013**, la demandante estaba vinculada a EPM, y por ser servidora público,

²⁰ Folio 14- 18

²¹ Folio 34- 47

²² Folio 20- 25

²³ (Historia laboral Folio 31)

no tiene derecho al retroactivo pensional por el tiempo en que recibió salario. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en el Artículo 19 de la Ley 344 de 1996, declarado exequible con la sentencia **C 584 de 1997**, aspecto claramente decantado por la jurisprudencia nacional: **SL 17358 – 2017 SL 3939 - 2018 SL 330 – 2019**.

Así, habiéndose acreditado que la señora ZULUAGA ARISTIZABAL estuvo efectivamente vinculada en EEPP de MEDELLIN hasta el **31 de enero de 2014**, y que la entidad reconoció mesadas pensionales a partir desde el **1 de diciembre de 2013**, es claro que no le asiste razón a la apelante cuando solicita que se DECLARE que no se encuentra en la obligación de devolver las mesadas. Por el contrario, habiéndose insistido por COLPENSIONES al proponer las excepciones, que la actora debe reembolsar las mesadas de diciembre de 2013 y enero de 2014, la Sala DECLARARÁ la compensación así alegada, autorizando a la administradora que al momento del pago del RETROACTIVO PENSIONAL, descuente la suma de **\$4.565.644**, correspondiente a las dos mesadas, debidamente indexada

7. COSTAS

Se REVOCARÁ la CONDENA en costas en primera instancia. Y no se causan costas en segunda, atendiendo a las particularidades del caso concreto, en la medida en que la actora se había trasladado al RAIS y desde esa perspectiva, el reconocimiento pensional efectuado inicialmente con Ley 100 se encuentra ajustado al efecto consagrado en el artículo 4 del artículo 36 de dicho cuerpo normativo.

LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECIDE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado SEGUNDO Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

PRIMERO: SE CONDENA a COLPENSIONES al reajuste de la pensión de vejez de la señora MARTHA OLIVIA ZULUAGA ARISTIZABAL identificada con c.c. 21.396.037, como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la **Ley 71 de 1988**, y como consecuencia de ello deberá pagar **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

PESOS (\$ 41.171.894) por concepto de reajuste de las mesadas pensionales causadas entre el **1 de febrero de 2014 y el mes agosto de 2020**, con la adicional de diciembre.

A partir del **1 de septiembre de 2020**, la entidad continuará reconociendo la pensión, en cuantía de **\$4.135.186**, mientras subsistan las causas que le dieron origen, con la mesada adicional de diciembre.

SEGUNDO: SE CONDENA a COLPENSIONES a pagar la indexación de cada mesada al momento del reconocimiento del retroactivo pensional, liquidándola de acuerdo a la formula y criterio expuestos en la parte motiva.

TERCERO: COLPENSIONES descontará del retroactivo pensional, el valor de los aportes en salud sobre cada mesada, y los trasladará al Sistema General de Salud.

CUARTO: Se autoriza a COLPENSIONES que al momento del pago del RETROACTIVO PENSIONAL, descuente la suma de \$4.565.644, correspondiente a las dos mesadas, debidamente indexada.

QUINTO: SE ABSUELVE DE LAS DEMÁS PRETENSIONES INCOADAS EN SU CONTRA.

SEXTO: NO SE CONDENA EN COSTAS EN LAS INSTANCIAS

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

CERTIFICO:

Que la presente providencia fue notificada por **ESTADOS N° 105** fijado en la página web de la Rama Judicial el día de hoy.

Medellín, 5 de agosto de 2020

Secretario